

ARTICULOS

CRISIS Y POLITICA ECONOMICA DEMOCRATA CRISTIANA

Fernando Sánchez

RESUMEN

En este artículo se estudia la evolución de la política económica ejecutada por la democracia cristiana durante los primeros 2 años de su gestión gubernamental. El análisis se aborda desde la perspectiva de que la política económica no es el resultado de un proceso de optimización técnica, sino la respuesta gubernamental en lo económico a las presiones de las distintas fuerzas sociales, internas y externas, en un contexto de tendencias económicas determinadas.

Se argumenta que los criterios que han regido la formulación de la política económica en los últimos 2 años se han ordenado progresivamente en torno a la estrategia de contrainsurgencia diseñada por Estados Unidos conforme a su propio interés de seguridad nacional, quedando relegado el interés del pueblo salvadoreño.

A principios de 1986 el actual gobierno implementó un "Programa de estabilización y reactivación económica," cuyo objetivo sería enfrentar la inflación y los déficits externo y fiscal y reactivar la economía nacional. Según el Banco Central de Reserva, en 1985 el déficit externo ascendió a 1149.7 millones de colones, el

fiscal a 744.0 millones de colones, la inflación alcanzó 22.4 por ciento, mientras el Producto Interno Bruto creció escasamente 1.6 por ciento. Trabajos recientes¹ han demostrado que los orígenes de este comportamiento económico son fundamentalmente estructurales, en ellos se argumenta que la economía salvadoreña tiende

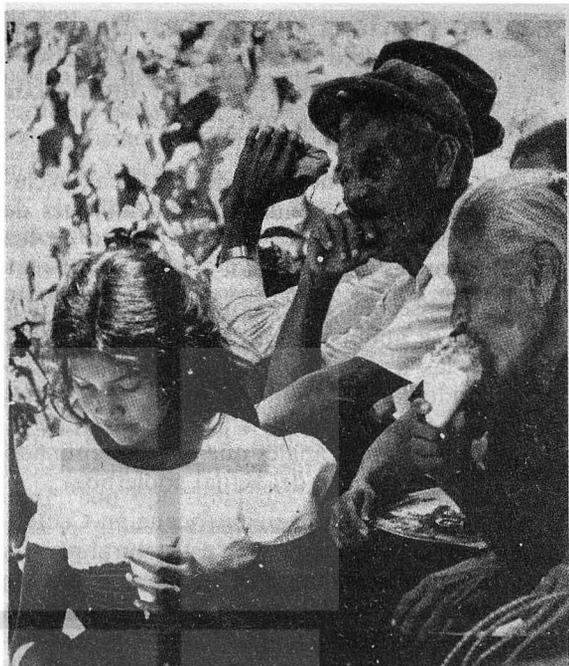
“naturalmente” hacia los desequilibrios externo e interno. Pero la economía se desvía en cualquier dirección en torno a su tendencia, entre otras causas, por las medidas de política económica llevadas a cabo en cada momento. En otras palabras, la política económica puede acelerar o amortiguar los desequilibrios económicos. En consecuencia, la evolución de la economía durante los 2 años de gobierno demócrata cristiano ha sido determinada tanto por las tendencias estructurales de la economía, como por la política económica ejecutada en el período considerado.

La política económica no es el resultado de un ejercicio abstracto de optimización técnica elaborado en las oficinas de planificación gubernamental; por el contrario, debe considerarse como la respuesta económica del gobierno a las presiones diferenciadas de las distintas fuerzas sociales, internas y externas, en un contexto de tendencias y problemas económicos determinados. Es desde esta perspectiva como la política económica adquiere su doble carácter técnico-político, subordinándose uno u otro componente según las circunstancias coyunturales.

El presente ensayo es un intento no acabado por conocer la evolución coyuntural de la política económica durante la actual crisis política. Siguiendo la perspectiva descrita, en la primera parte se caracterizan las distintas fuerzas que en el contexto actual de crisis han condicionado las medidas de política económica. La idea central que guía el trabajo afirma que la principal fuerza determinante de la política económica ejecutada durante los 2 años anteriores ha sido el gobierno de Reagan y que su capacidad de control ha aumentado a lo largo del período. Luego se analiza la evolución económica durante los primeros 19 meses del gobierno del presidente Duarte y la evolución posterior al “Programa de estabilización y reactivación económica” de enero de 1986.

I. Los condicionantes de la política económica

La política económica en El Salvador en los años 80 y más marcadamente en los últimos 2 años, ha estado determinada por una multiplicidad de factores, entre los cuales destacan con distinta jerarquía las tendencias económicas estructurales, el gobierno de Reagan, la Fuerza Armada, el sector empresarial y el sector popular. A continuación desarrollamos sucesivamente cada uno de estos factores.



El Salvador se encuentra en una profunda crisis económico-político-social, cuyas raíces son estructurales. Los límites que las estructuras han impuesto continuamente al desarrollo condujo al cuestionamiento progresivo del régimen salvadoreño, lo cual desembocó en los años 80, en lo militar, en el enfrentamiento sostenido entre el FMLN y la Fuerza Armada, y, en lo económico, en una profunda contracción de la actividad económica, acompañada por sendos déficits de divisas y fiscal, los cuales amenazan con quebrar el funcionamiento del aparato productivo. Como se ha demostrado en distintos trabajos, la estructura oligopólico-dependiente salvadoreña tiende naturalmente a provocar déficits comerciales con el exterior y a requerir la participación del gasto público como dinamizador de la economía, a causa de la tendencia de la inversión privada a autoderrotarse, lo cual se traduce en tendencia al déficit fiscal, debido a la rigidez de la estructura tributaria. Estas tendencias deficitarias que ya se manifestaban en la década pasada, se potenciaron con la crisis política actual. Unos pocos datos resumen la crisis económica salvadoreña. En 1983, el Producto Interno Bruto se contrajo el 21.5 por ciento con respecto al nivel de 1979; en 1983, año previo al ascenso de la democracia cristiana al gobierno, el déficit externo de bienes y servicios fue de 771.2 millones de colones, equivalente al 42.0 por ciento del valor de

La democracia cristiana trata de modernizar el capitalismo salvadoreño para fortalecerlo y asegurarlo como su aliado a largo plazo. Por lo tanto, éste es el motor de la economía y el sujeto privilegiado de su política económica.

nuestras exportaciones; y el déficit fiscal, excluyendo donativos, ascendió a 784.0 millones de colones, equivalentes al 43.3 por ciento de los ingresos totales del gobierno.

En consecuencia, cualquier política económica que se aplique en El Salvador debe tener presente las tendencias antes señaladas, mucho más cuando han alcanzado las dimensiones antes indicadas. Como veremos adelante, ellas han sido los factores principales que han determinado la política económica del actual gobierno.

La intervención norteamericana en Centroamérica es casi una constante estructural para la región. La historia registra una larga lista de ellas, pasando por Nicaragua en los 20 y por la Guatemala de Arbenz. Apartir de 1979, después del triunfo de la revolución sandinista y de la explotación de la crisis salvadoreña, la intervención norteamericana en la región y en particular en El Salvador se profundizó y adquirió nuevas modalidades. La pérdida de Nicaragua y la potencial pérdida de El Salvador llevó al gobierno norteamericano a reevaluar su política exterior para Centroamérica. Aunque ya en los últimos años del gobierno de Carter se dio un alejamiento de la política de derechos humanos hacia un mayor intervencionismo, ha sido con el gobierno de Reagan que aquélla ha adquirido su actual dimensión intervencionista.

El proyecto de Estados Unidos en El Salvador se ha conformado en torno a algunos objetivos, tomando en cuenta sus propias restricciones. El objetivo de largo alcance es su propia seguridad nacional en la región. Desde la perspectiva del gobierno de Reagan la seguridad nacional solamente puede alcanzarse² a la larga fortaleciendo y estabilizando el sistema capitalista en la región y para ello hay que remozar el *status-quo* político y económico. El camino hacia este objetivo exige la eliminación de la guerrilla salvadoreña y la alineación de la izquierda según los términos de Washington.

La principal restricción del proyecto norteamericano ha sido su poco consenso interno. Después de la experiencia de Viet Nam, es un hecho que la población de Estados Unidos está menos dispuesta a enviar a sus jóvenes a morir en

el exterior. Por consiguiente, el proyecto ha sido diseñado conforme a esta restricción, tomando en cuenta que éste en sí mismo deberá ir eliminando progresivamente sus propias restricciones.

La estrategia norteamericana es el "conflicto de baja intensidad,"³ la cual debe desarrollarse como "guerra total" en los frentes económico, político, militar, social y psicológico. Los elementos básicos de la estrategia son, entre otros, los siguientes.⁴

1. la guerra debe ganar el apoyo del pueblo norteamericano y del pueblo en conflicto. Por consiguiente, el objetivo de la estrategia será la población y no el territorio;
2. corresponde a las fuerzas locales ganarse a su propia población. Estados Unidos no debe intervenir directamente, pero sí entrenar y limpiar de abusos y corrupción a las fuerzas locales;
3. Estados Unidos deberá, además, controlar y dirigir los aspectos no militares de la guerra;
4. se deberá reconstruir la nación, combinando defensa interna con ayuda económica y
5. los recursos y convicciones ideológicas del sector privado deben alinearse para ayudar a los esfuerzos del gobierno.

La disposición del presidente Duarte de llevar adelante el proyecto norteamericano en El Salvador lo ha convertido en el mejor aliado local del gobierno de Reagan en el corto plazo,⁵ en cuanto ha facilitado las requisiciones de ayuda al congreso y ha abierto mayores espacios para aislar políticamente a la guerrilla salvadoreña.

En todo esto se destacan 4 elementos de la estrategia norteamericana que sirven para entender la evolución de la política económica del gobierno demócrata cristiano:

1. la extensión de la guerra según la estrategia de guerra total;
2. la extensión de la ayuda militar y económica;
3. el control y la dirección de la política económica y
4. el apoyo al sector privado.

La Fuerza Armada considera que su propia sobrevivencia depende de la eliminación del FMLN-FDR, cuya realización sólo es posible con la ayuda económica y militar de Estados Unidos. La Fuerza Armada, en consecuencia, ha estado dispuesta, no sin graves conflictos en su interior, a someterse a la directriz del proyecto norteamericano para El Salvador y para la región. En una reciente conferencia de prensa el jefe del estado mayor conjunto se refirió a uno de los aspectos de la estrategia de guerra, que bajo el nombre de "Unidos para reconstruir" viene desarrollándose desde hace varios meses, en los siguientes términos: "en esta guerra no se trata de conquistar territorio, sino de conquistar la mente y voluntad de la población... se trata de aislar física y psicológicamente a la subversión de la población civil."⁶ Esta estrategia comprende una etapa de reconstrucción y reinstalación de la infraestructura económica y social destruida por la guerra y obras de desarrollo comunal para disputar las masas al FMLN. En otras palabras, se trata de la reconstrucción de la nación según la estrategia de conflicto de baja intensidad.

La comunidad de objetivo —la eliminación del FMLN-FDR— de la Fuerza Armada y el gobierno de Reagan ha colocado el desarrollo de la guerra como uno de los elementos determinantes de la profundización y prolongación de la crisis salvadoreña. Siendo tan fundamental el papel de la guerra en la estrategia norteamericana, cuya ejecución no puede ser asumida directamente por el ejército norteamericano, el gobierno de Reagan, mediante la ayuda militar, y la democracia cristiana, con la política económica —más específicamente con la política fiscal—, se han encargado de fortalecer al ejército. La Fuerza Armada tiene claridad al respecto y exige que "todos los recursos del Estado deben ponerse al servicio de nuestra victoria final. Solamente venciendo completamente a los enemigos de la patria podremos recobrar la paz y la prosperidad."⁷

El sector privado exportador se ha debilitado considerablemente en su capacidad de influir en la formulación de la política económica; aún más, en su capacidad de frenar algunas medidas económicas que le han afectado directamente, tal es el caso de las reformas, y recientemente del impuesto extraordinario al café. La disminución de su capacidad de presión se ha debido fundamentalmente al carácter de la crisis y a la estrategia de Estados Unidos para enfrentarla. La crisis es estructural y se ha desarrollado precisamente a

causa de un modelo económico históricamente conformado en función del sector privado, principalmente del exportador; por otra parte, el gobierno de Reagan necesita enfrentarla liberando al capitalismo salvadoreño de la que ellos consideran sus excesos.

No obstante, Estados Unidos continúa reconociendo que ideológicamente su mejor y más permanente aliado a largo plazo es el sector empresarial.⁸ Esto quedó claro en la declaración conjunta que emitieron en mayo de 1984, en Estados Unidos, el recién elegido presidente Duarte y el presidente norteamericano, para precisar las "futuras bases de entendimiento y colaboración," "una forma de ampliar la riqueza y crear empleo es proteger y fomentar un sector privado fuerte, con oportunidades para pequeños, medianos y grandes empresarios... una estrecha colaboración entre el gobierno y la libre empresa realizará la revitalización de la producción, y la reconstrucción nacional. Esta colaboración constituye la base para estimular la confianza nacional, garantizar el acceso a los créditos internacionales y atraer nuevas inversiones del exterior."⁹

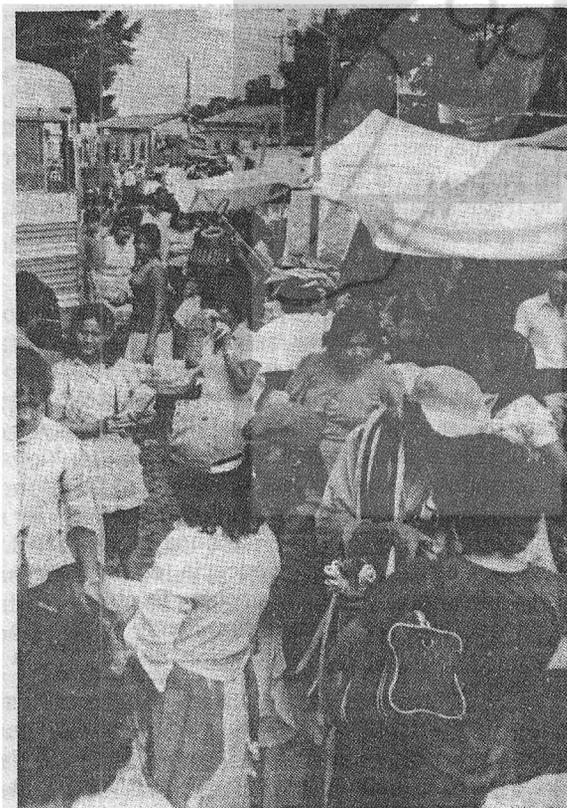
De lo que se trata es de modernizar el capitalismo salvadoreño para fortalecerlo y asegurarlo como su aliado a largo plazo. Por consiguiente, el motor de la economía y sujeto privilegiado de la política económica de la democracia cristiana será aquel sector modernizante del gran capital y, en particular, el más ligado a las exportaciones no tradicionales en el marco de la iniciativa de la Cuenca del Caribe, lo cual estrechará aún más los intereses norteamericanos y los del capital salvadoreño y, en general, del capital regional.

El sector oligárquico tradicional deberá someterse a esta estrategia norteamericana y aceptar perder algunos de sus privilegios de antaño para poder sobrevivir como capitalistas. Este debilitamiento de la capacidad de influencia de la oligarquía exportadora, sin embargo, es relativo, pues aún continúa siendo muy fuerte por su capacidad de generar divisas para una sociedad que se caracteriza por la tendencia estructural a usarlas mucho y producirlas poco. Es en este sentido que este sector continúa siendo sujeto de consideración en la formulación de la política económica.

El sector popular, después de haber constituido el principal eje de las protestas de los años 1979 y 1980, fue neutralizado por la fuerza de la

represión a que se le sometió durante los siguientes años. Los encarcelamientos; desaparecimientos y asesinatos de líderes sindicales y de sus bases de apoyo por los escuadrones de la muerte, terminaron temporalmente con la capacidad de protesta que habían mostrado estos sectores. Sin capacidad de protestar contra las medidas económicas, mucho menos de incidir en su formulación, sus salarios fueron congelados por el decreto 544, emitido por la junta de gobierno que presidía el ingeniero Napoleón Duarte. La vigencia del decreto, entre 1981 y enero de 1984, descargó todo el peso de la crisis económica sobre las espaldas del sector popular.✓

El fortalecimiento de los sectores populares no está presente en la agenda norteamericana; estos sectores son importantes sólo estratégicamente, en cuanto deben ser alejados de las bases del FDR-FMLN y atraídos para apoyar al gobierno demócrata cristiano. Las necesidades electorales de 1984, el populismo de Duarte y el interés de la Unidad Popular Democrática (UPD) de influir en el proyecto gubernamental para llevar adelante la reforma agraria y formular políticas crediti-



cias favorables a los cooperativistas convergieron en la firma de lo que se conoció como el "pacto social," según el cual, el sector popular apoyaría la elección de Duarte y el futuro presidente concedería a la UPD sus demandas.

Como veremos más adelante, los sectores populares han recuperado su capacidad de incidir en la política económica en los últimos 2 años no por la firma de pactos sociales, ni por formar parte de los sectores que hay que fortalecer según la estrategia norteamericana, sino por sus continuadas huelgas, las cuales han constituido lo que se ha dado en llamar el resurgir del movimiento laboral.

En síntesis, los principales condicionantes de la política económica en los últimos 2 años han sido los siguientes:

1. la imposición de la estrategia contrainsurgente norteamericana;
2. la extensión de la guerra;
3. la promoción del sector empresarial modernizante;
4. la lucha política librada por el sector oligárquico tradicional para revertir el proceso reformista;
5. la presión del movimiento laboral, luchando por sus reivindicaciones largamente postergadas y
6. las tendencias estructurales de la economía.

II. Las políticas económicas de la democracia cristiana

1. La política fiscal

El eje central de la política económica del gobierno demócrata cristiano ha sido la estrategia norteamericana de guerra; en consecuencia, el factor determinante de la política fiscal ha sido el fortalecimiento de la Fuerza Armada. La política fiscal de gasto, por tanto, se ha puesto en función de las demandas de la guerra y la política del ingreso se ha orientado a seguir el ritmo creciente del gasto público, a fin de amortiguar la expansión del déficit fiscal.

El déficit fiscal es en sí mismo un problema estructural en El Salvador. Como se argumenta en un artículo reciente,¹⁰ la economía salvadoreña genera tendencialmente déficit fiscal; por un lado, el gasto público es la variable dinamizadora e indispensable de la economía porque impulsa el crecimiento y atiende a las grandes demandas de

la educación y de la salud que el sector privado no es capaz de atender; y por el otro, el Estado enfrenta grandes restricciones para expandir sus ingresos. Adicionalmente, esta tendencia estructural se ha expandido extremadamente con las demandas fiscales que la expansión de la Fuerza Armada ha impuesto para llevar adelante la guerra de los términos establecidos por Washington.

La expansión del ejército durante el gobierno de Duarte se ha acelerado conforme a la nueva estrategia norteamericana, la Fuerza Armada ha crecido considerablemente en miembros y en equipamiento de guerra. Durante los primeros 18 meses de gobierno, el ejército creció en más del 10 por ciento, alcanzando los 52 mil miembros y su flota de helicópteros se triplicó llegando a 61 unidades.¹¹ Por otra parte, las demandas de la reconstrucción de la nación, según la actual estrategia contrainsurgente, han puesto mayores presiones fiscales a la administración pública, al exigir grandes volúmenes de recursos. En un documento reciente que la Fuerza Armada distribuyó a la prensa en el cual se presentan las

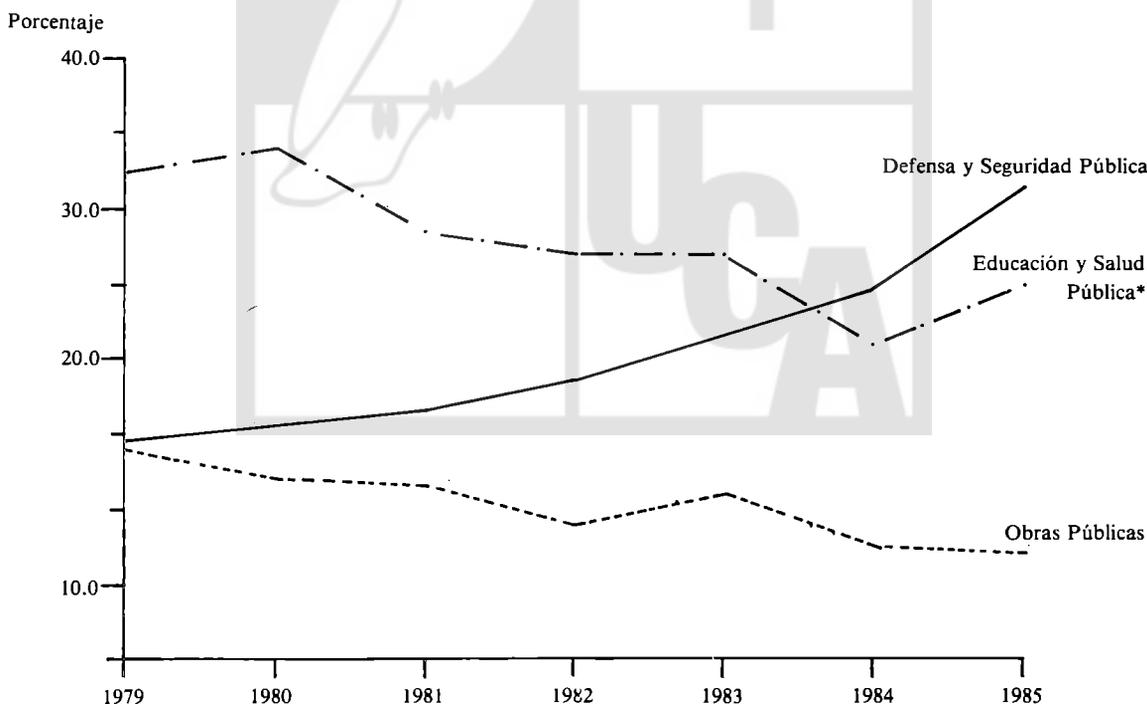
líneas generales del plan "Unidos para reconstruir," se señala que "es necesario que los fondos de la ayuda exterior, canalizados a través de los diferentes ministerios, sean empleados prioritariamente en apoyo"¹² al plan.

La expansión del ejército y sus crecientes gastos de operación han provocado dos grandes movimientos económicos. En primer lugar, el presupuesto fiscal destinado a gastos militares se ha expandido a costa de los presupuestos sociales. En 1983 y 1985, la parte del presupuesto asignada a defensa y seguridad pública ascendió del 21.4 por ciento al 31.6 por ciento y se ha proyectado 36.0 por ciento para 1986, mientras que los gastos asignados a obras públicas descendieron del 11.2 por ciento en 1983 al 7.0 por ciento en 1985, y los de educación y salud pública descendieron del 27.0 por ciento en 1983 al 21.1 por ciento en 1984 y ascendieron al 25.2 por ciento en 1985.*El gráfico 1 muestra el comportamiento señalado.

El presupuesto fiscal aprobado para 1986 agudiza la asimetría entre los gastos de guerra y los gastos sociales. El presupuesto asignado a de-

GRAFICO 1

Evolución de la estructura del gasto público 1979-1985



Fuente: Informe complementario constitucional. Ministerio de Hacienda.

*En 1984 y 1985 se incluyó Previsión Social.

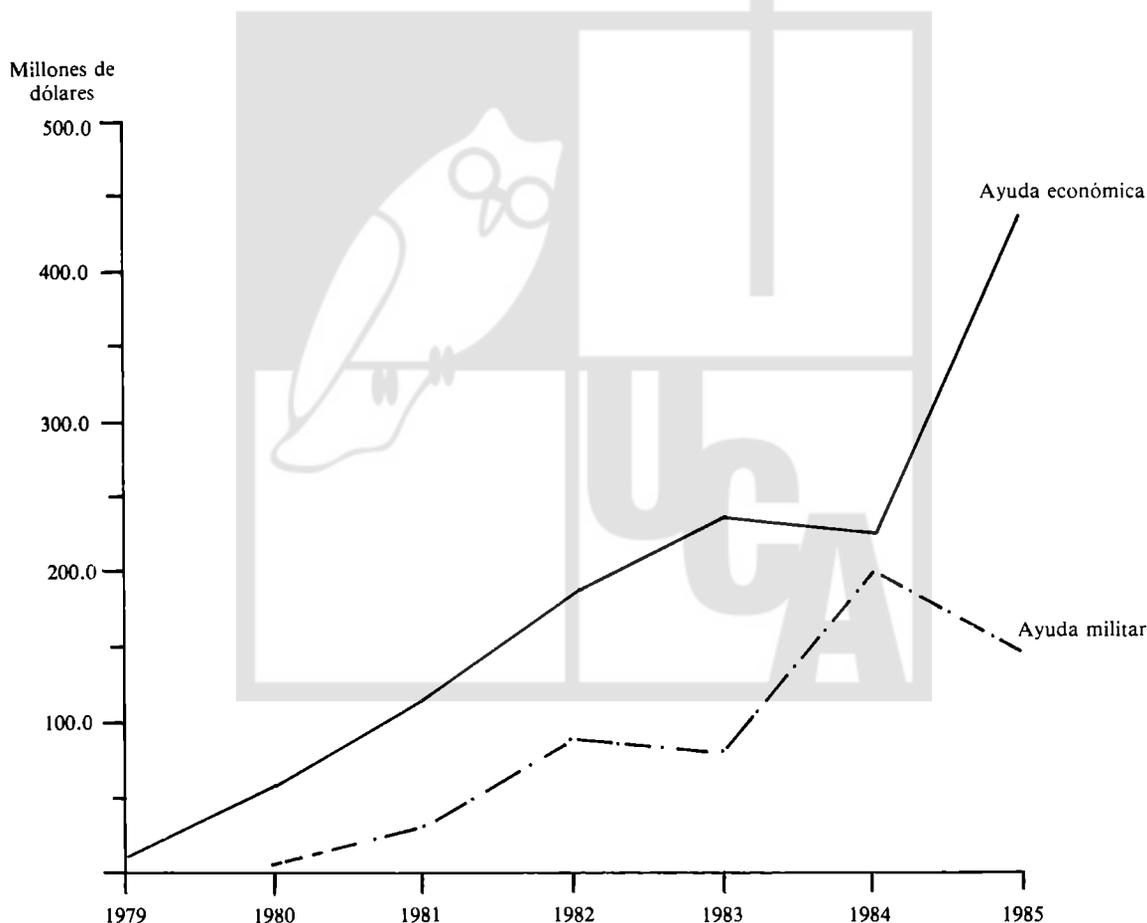
fensa aumentó en 70 millones de colones, mientras que los de educación y salud pública descendieron en 14.5 y 10.6 millones de colones respectivamente. El deterioro en la atención a los problemas sociales se está dando en una situación en que, como ha informado el ministro de educación, más de un millón de salvadoreños mayores de 10 años son analfabetos, existen 730 escuelas de educación básica cerradas y un déficit de 2000 maestros respecto a la demanda y una enorme escasez de pupitres y material didáctico. Por otro lado, la reducción de los gastos presupuestados para salud pública se ha dado cuando 60 de cada mil niños nacidos vivos mueren antes de cumplir un año de edad; 6 de cada 10 presen-

tan algún grado de desnutrición; y sólo existen 14 camas de hospital y 3 enfermeras graduadas por cada 10.000 habitantes.¹³

En segundo lugar, la ayuda militar norteamericana se ha expandido extremadamente en los 2 años de gobierno demócrata cristiano. El gráfico 2 muestra que uno de los papeles de Duarte dentro de la estrategia norteamericana ha sido el de constituirse en una de las condiciones necesarias para la entrada masiva de ayuda militar y económica. De 547.3 millones de dólares en ayuda militar otorgada entre 1979 y 1985, el 62.6 por ciento, ésto es, 342.2 millones de dólares, se han entregado durante los 2 años de gobierno Demócrata cristiano.

GRAFICO 2

Evolución de la ayuda económica y militar 1979-1985



Fuente: Agencia Internacional para el Desarrollo
Presentada en *NACLA*. Vol. XX. No. 1.

La política fiscal de gasto se ha puesto en función de las demandas de la guerra y la política del ingreso se ha orientado a seguir el ritmo creciente del gasto público.

En el otro extremo de la política fiscal, la dinámica de la política de ingresos ha estado determinada por la dinámica de la política del gasto público. Los ingresos han sido forzados, a pesar de las restricciones estructurales para gravar más a los que más tienen, a seguir la trayectoria ascendente de los gastos de guerra. Entre 1983 y 1985 los ingresos corrientes del gobierno central aumentaron el 51.0 por ciento, de 1255.8 millones de colones ascendieron a 1983.3 millones de colones.

No obstante, este incremento de los ingresos fiscales se descargó nuevamente sobre los hombros de los sectores populares. Ciertamente, el incremento en los ingresos corrientes provino de 473 millones de colones adicionales de impuestos indirectos, de los cuales 200 millones de colones fueron impuestos captados por el nuevo acuerdo No. 108 del 15 de agosto de 1985 de la ley de timbres fiscales, y sólo 99 millones de colones provinieron de impuestos directos. Este comportamiento regresivo de los ingresos fiscales pone de manifiesto dos cosas. La primera, que el gobierno ha impuesto e impondrá toda la presión requerida para expandir sus ingresos de acuerdo a las necesidades de la guerra; y la segunda, que se ha continuado y, de acuerdo a la nueva política de estabilización decretada en enero de 1986, continuará descargando dichas presiones sobre los sectores populares de menor ingreso, sin capacidad para incidir directamente en la formulación de la política fiscal.

Se comprende, entonces, que las demandas de la guerra y los límites que enfrenta el gobierno en la expansión de los ingresos, a pesar de la reducción drástica de las asignaciones de carácter social, hayan mantenido durante estos años niveles desproporcionados de déficit fiscal. De 1983 a 1985 el déficit fiscal excluyendo donaciones disminuyó únicamente 5.0 por ciento. Los 744 millones de colones que alcanzó en 1985, equivalen aproximadamente a las tres cuartas partes del valor total de las exportaciones de café durante el mismo año.

2. La política de reactivación

La reactivación económica ha sido el segundo elemento en la escala de prioridades de la

política económica demócrata cristiana. La reactivación económica permitiría sacar al país de la profunda crisis y con ello, se avanzaría, dentro de la estrategia de guerra total, en dos direcciones principales: en la consolidación de Duarte en el poder y en la reconstrucción de la nación.

La reactivación económica ha descansado en la promoción del sector privado. Ya hemos indicado que en la declaración conjunta Duarte-Reagan de 1984 se destacaba la necesidad de "proteger y fomentar un sector privado fuerte" y que la "base para estimular la confianza nacional" es la necesaria "estrecha colaboración entre el gobierno y el sector privado." A esto agregaba el vice-presidente Castillo Claramount en mayo del mismo año: (los democristianos) no somos enemigos de la libre empresa ni estamos a favor de aniquilar la iniciativa. Hay un clima de entendimiento y estamos seguros que habrán de limarse asperezas, lo que traerá beneficios a todos.¹⁴

La disposición del sector privado a jugar el rol que el proyecto norteamericano le ha asignado, ha estado sujeta, sin embargo, a tres condicionantes: la reversión de las reformas, la participación del sector privado en la formulación de los planes y políticas de desarrollo y la creación de condiciones que aseguren su rentabilidad.

La reforma agraria, la nacionalización bancaria y la nacionalización del comercio exterior han constituido para la oligarquía tradicional el quiebre de los tres pilares fundamentales de la reproducción del capital dominante de la economía nacional. Este sector ha elaborado y coordinado su posición frente al gobierno de Duarte alrededor de la reversión de esas medidas. Esta posición ha cuestionado no sólo la gestión económica del gobierno, sino su misma legitimidad política.

Duarte, por su parte, no está dispuesto a concederles aquellas exigencias, principalmente porque esas medidas constituyen su imagen reformista la cual le posibilita jugar su papel actual dentro de la estrategia norteamericana. En la declaración conjunta mencionada, los presidentes Duarte y Reagan se referían a la necesidad de "protección y mejoramiento de las reformas." No obstante, si bien parece que el gobierno no es-

tá dispuesto a retroceder en las reformas, tampoco está dispuesto a llevarlas adelante. La derogación del decreto 207 en julio de 1984, a petición de los empresarios agrícolas, con lo cual se dio muerte a la fase III de la reforma agraria, constituye una evidencia de lo afirmado antes. La lucha que ha mantenido ASCAFE para recuperar la comercialización del café, aunque se remonta a los años posteriores inmediatos a la aprobación del decreto de nacionalización del comercio exterior, durante el gobierno de Duarte ha cobrado mayores dimensiones. El proyecto de "ley de extinción del monopolio del café" presentado en noviembre de 1984, basado en el argumento de que la existencia del INCAFE es inconstitucional, continúa a la fecha como uno de los grandes problemas que enfrenta la política de reactivación de Duarte.

En el contexto de conflicto, la reactivación del sector agropecuario exportador ha sido prácticamente imposible, más bien lo que se ha experimentado es una considerable contracción. Entre 1983 y 1985, como muestra el cuadro 1, exceptuando la producción de caña de azúcar, la cual se expandió en un 20.4 por ciento, el café y el algodón se contrajeron respectivamente en 9.3 y 38.9 por ciento.

CUADRO 1

PRODUCTO	1983	1984	1985
Café (miles de qq)	3391.72	3171.72	3075.00
Algodón (miles de qq)	885.96	683.99	541.70
Caña de azúcar (miles de T.C.)	3016.40	3401.94	3630.10

Fuente: Banco Central de Reserva de El Salvador (BCR)

La participación del sector empresarial en la formulación de los planes y políticas de desarrollo ha sido una de las exigencias permanentes de la empresa privada. Esta exigencia puede considerarse satisfecha relativamente, principalmente para aquellos sectores empresariales que están jugando el rol principal en la estrategia norteamericana, vinculados a las exportaciones no tradicionales dentro de la Iniciativa de la Cuenca del Caribe. FUSADES, institución creada por este sector empresarial, ha ejercido una considerable influencia en la definición de la política económica. El gobierno, respaldado por

la AID, ha fomentado la estrategia de desarrollo que impulsa FUSADES. Entre las medidas de política económica favorables a este sector se encuentran la progresiva transferencia de los productos de exportación no tradicionales al mercado paralelo durante los primeros 19 meses de gobierno, la recientemente aprobada ley de fomento a las exportaciones y la cuantiosa ayuda que AID está canalizando al sector. Más recientemente el sector privado compartió con un equipo de técnicos del MIPLAN la elaboración de un programa de producción.

En cuanto a las exigencias de crear condiciones de alta rentabilidad, el gobierno ha estado dispuesto a satisfacerlas plenamente. Hacia ello ha orientado su política crediticia, salarial y cambiaria. En las memorias de 1984 del Banco Central de Reserva se establecía que "las medidas de política monetaria, crediticia y cambiaria adoptadas por las autoridades monetarias durante el presente ejercicio tuvieron como principales objetivos el de propiciar un crecimiento positivo real del Producto Interno Bruto, mediante la asistencia crediticia adecuada a las necesidades *legítimas* de demanda de los sectores productivos" (el subrayado es mío).

En los años 1984 y 1985, el sistema bancario otorgó al sector empresarial volúmenes de crédito mayores que en los años anteriores y a unas tasas de interés reducidas. En 1984 se decretó reducir entre 1.0 y 1.5 por ciento las tasas de interés a todos los créditos clase A corrientes y clase B.¹⁵

El crédito al sector privado después de haber crecido a una tasa promedio de 5.5 por ciento entre 1979 y 1983, creció 10.1 por ciento en 1984 y 26.2 por ciento en 1985, pasando de cerca de 3050.0 millones de colones en 1983 a 4200.0 millones de colones en 1985. El gráfico 3 muestra el cambio expansivo en el crédito al sector privado.

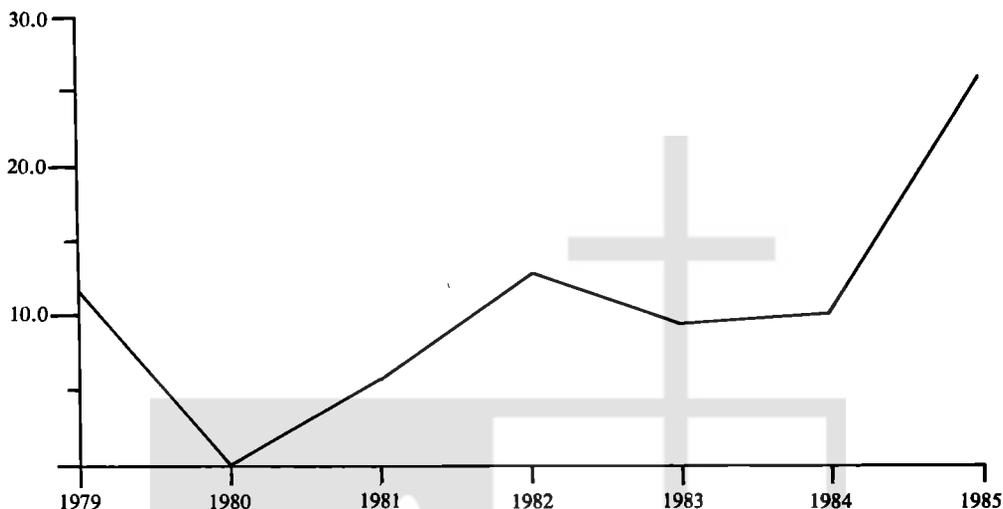
La política salarial ha estado orientada a mantener congelados los salarios para no afectar la rentabilidad empresarial y no acelerar la inflación. Los dos aumentos oficiales de julio de 1984 y enero de 1986, como argumentaremos adelante, fueron forzados por las luchas de los sectores laborales.

A pesar del énfasis del gobierno en la reactivación, en poner la política económica en función de la rentabilidad privada, sacrificando el componente social de su programa tradicional, la economía continúa en recesión. En estos 2 años

GRAFICO 3

Expansión del crédito al sector privado 1979-1985

Porcentaje



Fuente: Banco Central de Reserva

de análisis, el PIB creció sucesivamente 1.5 y 1.6 por ciento. Tres características podemos destacar en torno a este exiguo crecimiento. La primera, el sector agropecuario después de una ligera recuperación de la producción en 1984, continuó su tendencia contractiva en 1985 (ver el gráfico 4). A las contracciones del café y del algodón se agregaron, en 1985, las de maíz, el maicillo y el frijol con reducciones de 4.0, 5.0 y 29.0 por ciento respectivamente. Esta crisis agrícola ha sido subestimada por los análisis oficiales de la inflación. La segunda, el gobierno se apoyó en el sospechoso crecimiento del 12.0 por ciento del sector construcción. (La revista *Coyuntura económica* ha llamado la atención sobre el posible manipuleo de este resultado).¹⁶ La última, el crecimiento descansado en la ayuda norteamericana. De 1287.3 millones de dólares de ayuda económica que la AID ha dado al gobierno entre 1979 y 1985, el 51.0 por ciento, esto es, 655.3 millones de dólares, han sido entregados en los 2 años de gobierno demócrata cristiano (ver gráfico 2). Una idea del aporte de la ayuda económica norteamericana para el crecimiento de 1.6 por ciento del PIB en 1985 se ve en la siguiente relación: los 432.2 millones de dólares en ayuda económica de

ese año equivalían al valor conjunto de las ventas de café y azúcar durante el mismo año.

3. La política de salarios y precios

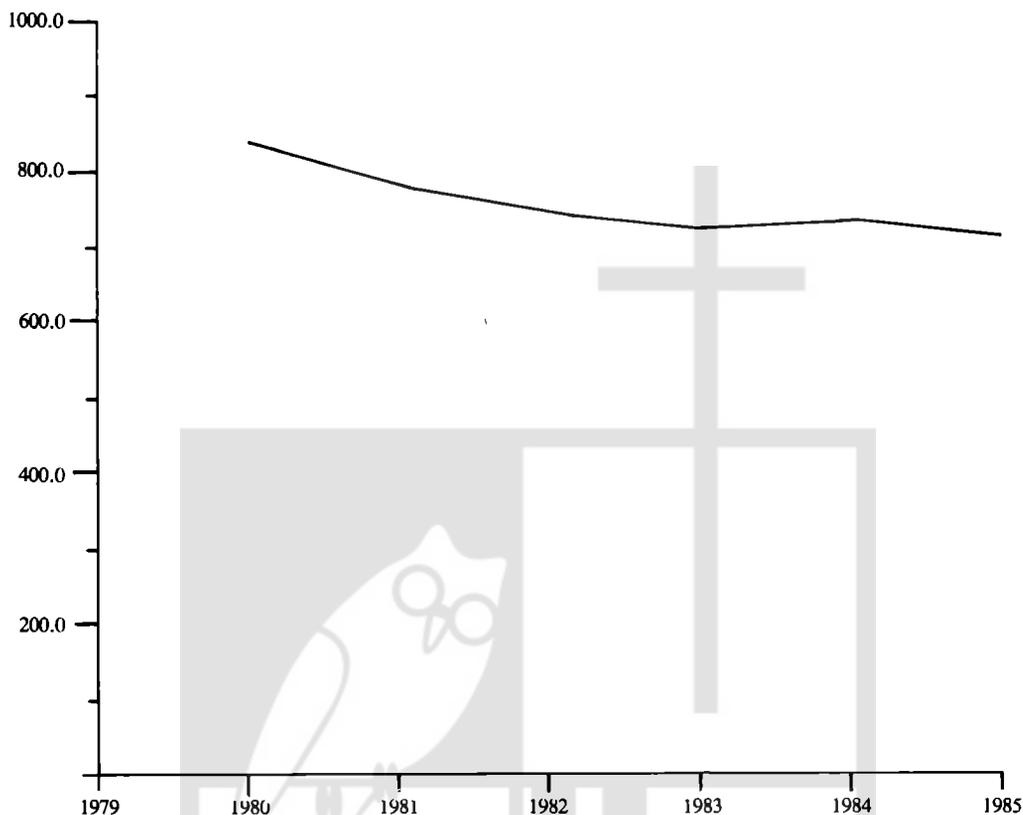
Los hechos de los primeros 2 años de gobierno democristiano han mostrado que el sector popular no ocupa una posición prioritaria en la agenda norteamericana. La ruptura del pacto social suscrito por la democracia cristiana y la UPD en 1984, previo a las elecciones presidenciales, a pesar de que la UPD cumplió con el apoyo electoral al entonces candidato presidencial José Napoleón Duarte y el tipo de respuestas que el gobierno ha ido dando a las demandas populares, han puesto de manifiesto cuál fue la opción del presidente Duarte frente a la disyuntiva sector privado-sector popular.

El gráfico 5 muestra una de las principales causas de la actual agitación laboral, la brecha inflacionaria. En él se aprecia gráficamente cómo el peso de la crisis económica y del financiamiento de la guerra se descargó sobre las espaldas de los sectores más humildes. El mecanismo utilizado consistió en liberar la carrera ascendente de los precios amarrando los salarios por el decreto 544 durante 3 años.

GRAFICO 4

Evolución del valor de la producción agropecuaria 1980-1985

Millones de
colones



Fuente: Banco Central de Reserva.

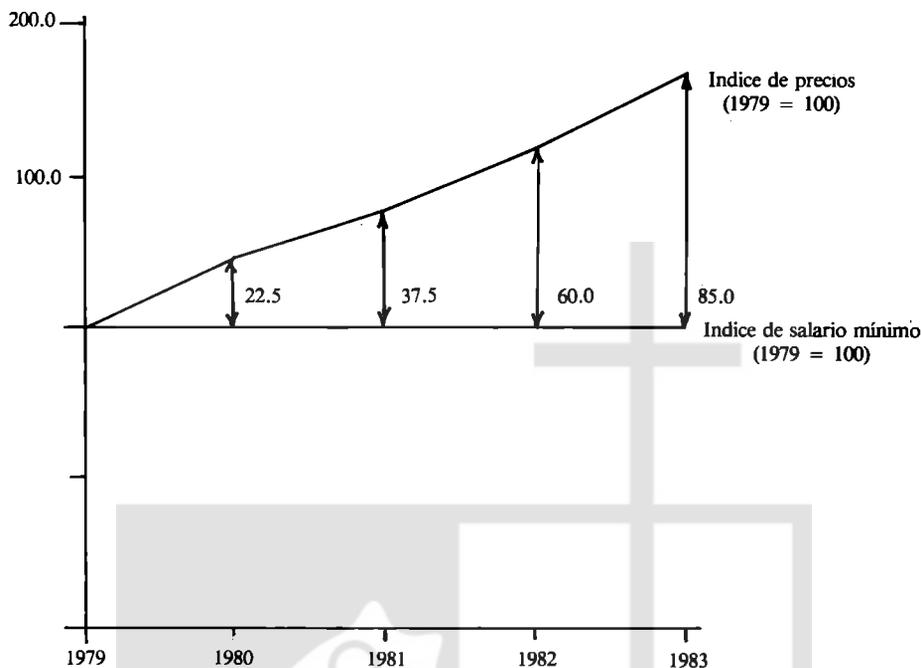
Aunque en diversas ocasiones se ha argumentado que los salarios se han aumentado debido a que la actual política económica es expansiva de la demanda, en el presente ensayo argumentamos que la política de Duarte ha estado orientada a mantener congelados los salarios. En efecto, contrario a la voluntad del ejecutivo, los 2 aumentos de salario al sector público en los últimos 2 años han sido forzados por las luchas laborales de los sectores populares. El primer aumento se decretó en julio de 1984 y el segundo en enero de 1986. Ambos fueron producto de considerables presiones

de los sectores laborales. El primer aumento estuvo precedido por una serie de huelgas que comenzaron en el mes de febrero del mismo año. Durante ese mes las huelgas principales fueron decretadas por STISSS, ASTIRA y SETA en el Seguro Social, y el IRA y ANDA respectivamente, exigiendo fundamentalmente aumentos salariales. Estas huelgas resueltas concediendo parcialmente las demandas económicas de los trabajadores, fueron acompañadas por paros menores en el sector privado: Talleres Sarti e Hilaturas de Centroamérica, entre otros. Nuevos paros labo-

A pesar del énfasis del gobierno en la reactivación, en poner la política económica en función de la rentabilidad privada, sacrificando los intereses populares, la economía continúa en recesión.

GRAFICO 5

La brecha inflacionaria en la presente década



Fuente: Calculado en base a datos del Banco Central de Reserva y Ministerio de Trabajo y Previsión Social.

rales se fueron dando durante marzo en la Lotería Nacional, MOP, MAG, ISTA y ANDES. Pero el movimiento más relevante, el que dio el último impulso a la serie de presiones que el sector laboral había ido acumulando y que desembocó en la forzada decisión del ejecutivo de decretar el aumento general de 130.00 colones a todos los empleados públicos en julio, fue el mantenido durante 43 días en el correo nacional por SUCEPES.

Es iluminador el tratamiento que se dio al financiamiento de los aumentos salariales. El financiamiento fue ampliamente discutido en la asamblea legislativa, el argumento que se impuso fue que no debería financiarlo el sector privado mediante impuestos adicionales, sino los mismos asalariados en tanto conjunto social. En este sentido, decían los partidos políticos representantes del sector empresarial, hay que financiar los aumentos salariales utilizando "las economías obtenidas y que se obtengan en salarios." En otras palabras, se establecía que se deberían con-

gelar algunas plazas y eliminar otras para generar un excedente que cubriera el monto de los aumentos salariales. La capacidad del sector empresarial para incidir en las medidas económicas se concretizó en la modificación del decreto mencionado y en la posterior emisión del decreto 11 sobre la austeridad en la administración pública, el 28 de julio.

El aumento de 150.00 colones mensuales a los empleados públicos decretado en enero de 1986 dentro del "Programa de estabilización y reactivación económica" y presentado como un mecanismo para aliviar el impacto futuro del programa, fue una ligera modificación al aumento de 100.00 colones mensuales que el presidente había anunciado el 22 de noviembre de 1985, en respuesta a las presiones laborales de los meses anteriores. La resistencia a los aumentos salariales la expresó el presidente al afirmar en esa ocasión que el gobierno "usará la razón y la fuerza que nos da la ley" para prevenir nuevos paros.

La gestión económica de Duarte en 1986 se enfrenta a un mayor deterioro y a una menor disposición del sector laboral y empresarial a aceptar pasivamente su política económica.

Este segundo cúmulo de presiones del sector laboral que desembocó en el segundo aumento de salarios se remonta hasta el mes de mayo de 1985. Después del desfile del día del trabajo que movilizó entre 10 y 15 mil trabajadores tuvieron lugar las huelgas decretadas por el SETA en ANDA y el STISSS en el Seguro Social. En ambas se exigieron aumentos salariales y la destitución de algunos jefes; además, el SETA exigió la destitución del presidente de la institución. Estas huelgas fueron resueltas entre despidos, amenazas y el asalto violento a las instalaciones del Seguro Social por tropas especiales el 2 de junio.

Entre octubre y noviembre se desarrollaron las huelgas de AGEMHA y ANDES en torno a exigencias de incrementos salariales y de la derogación del decreto 162, según el cual se facultaba al poder ejecutivo para trasladar a los empleados públicos de una dependencia a otra, en cualquier lugar del país o del exterior, por un plazo de 12 meses prorrogable. A pesar de que el ejecutivo, presionado por el movimiento laboral, eliminó la cláusula de prorrogabilidad del decreto en cuestión, las huelgas exigiendo aumentos salariales continuaron en el MAG, el MOP, el ISTU y ANTEL. Estas presiones laborales sobre el gobierno cristalizaron en el aumento salarial de enero de 1986.

La política económica del actual gobierno sobre los precios reveló sus límites frente al sector privado. Dos intentos fallidos del gobierno para controlar los precios fueron la ley de estabilización de precios de marzo de 1984 y la creación de una comisión de defensa del consumidor. Pero el intento más significativo en esta dirección fue el decreto 500, del 16 de agosto de 1985, por medio del cual se fijaba el margen de ganancia de los distribuidores de repuestos. Después de una rápida y coordinada respuesta de los empresarios, la cual incluyó el cierre de los almacenes correspondientes, el decreto fue abolido y sustituido por un acuerdo de descuento en los repuestos a los transportistas.

En síntesis, a pesar de que el gobierno no ha logrado evitar los aumentos salariales, debido al movimiento laboral, su política ha sido y continuará siendo la de mantener a todos los salarios, al mismo tiempo que su política, frecuentemente

anunciada, de control de los precios de los bienes básicos ha sido totalmente inefectiva.

4. La política del sector externo

La tendencia estructural de la economía salvadoreña hacia el déficit externo es uno de los principales condicionantes de la política económica. Ya en 1983, año anterior al ascenso de la democracia cristiana, el déficit ascendió acerca de 800 millones de colones, equivalentes al 43 por ciento del valor de todas nuestras exportaciones en ese año. A finales de 1985 el porcentaje ascendió al 65 por ciento. Este agudizamiento de la tendencia estructural se debió a las medidas concretas de política económica: la política de reactivación con sus políticas monetarias y crediticias, y las medidas de liberación de importaciones para captar mayores impuestos fiscales.

El déficit externo, las presiones de los sectores exportadores para transferir sus divisas al mercado paralelo y la Agencia Internacional para el Desarrollo (AID), son los factores principales que condicionaron la política externa entre 1984 y 1985. Una progresiva devaluación fue la respuesta. Ya a finales de 1984 todas las divisas provenientes del INCAFE, el IRA, la COPAL y las exportaciones no tradicionales habían sido trasladadas al mercado paralelo. A finales de 1985, solamente las importaciones de insumos para medicinas, fertilizantes, aceites, las importaciones de petróleo y de bienes de capital, estaban asignadas al mercado oficial. El "Programa de estabilización y reactivación económica" trasladó estas importaciones al mercado paralelo, unificando la moneda salvadoreña a un tipo de cambio de 5.00 colones por dólar.

Es importante señalar que las instituciones norteamericanas, como la AID, a través de la ayuda para sostener la guerra y la economía en el sector externo han ido condicionando la política económica en El Salvador. En efecto, en el informe enviado en 1985 por la Contraloría General del Gobierno de Estados Unidos a la AID y a la Secretaría de Estado se señalaba la necesidad de ejercer mayor presión sobre el gobierno salvadoreño a través de la asistencia económica, para llevar a cabo la devaluación oficial del colón; esta medida daría mayor cabida a la ayuda del Fondo

Monetario Internacional y permitiría, además, una mayor participación y control de la política económica del gobierno salvadoreño.

III. El programa de estabilización y reactivación económica de 1986

El gráfico 6 muestra los resultados de la gestión económica del gobierno democristiano durante los primeros 19 meses. En él se observa que la crisis económica se ha profundizado, exceptuando el leve decrecimiento en el déficit fiscal, todas las demás variables acentuaron notablemente sus desequilibrios, además de que el funcionamiento de la economía pasó a depender

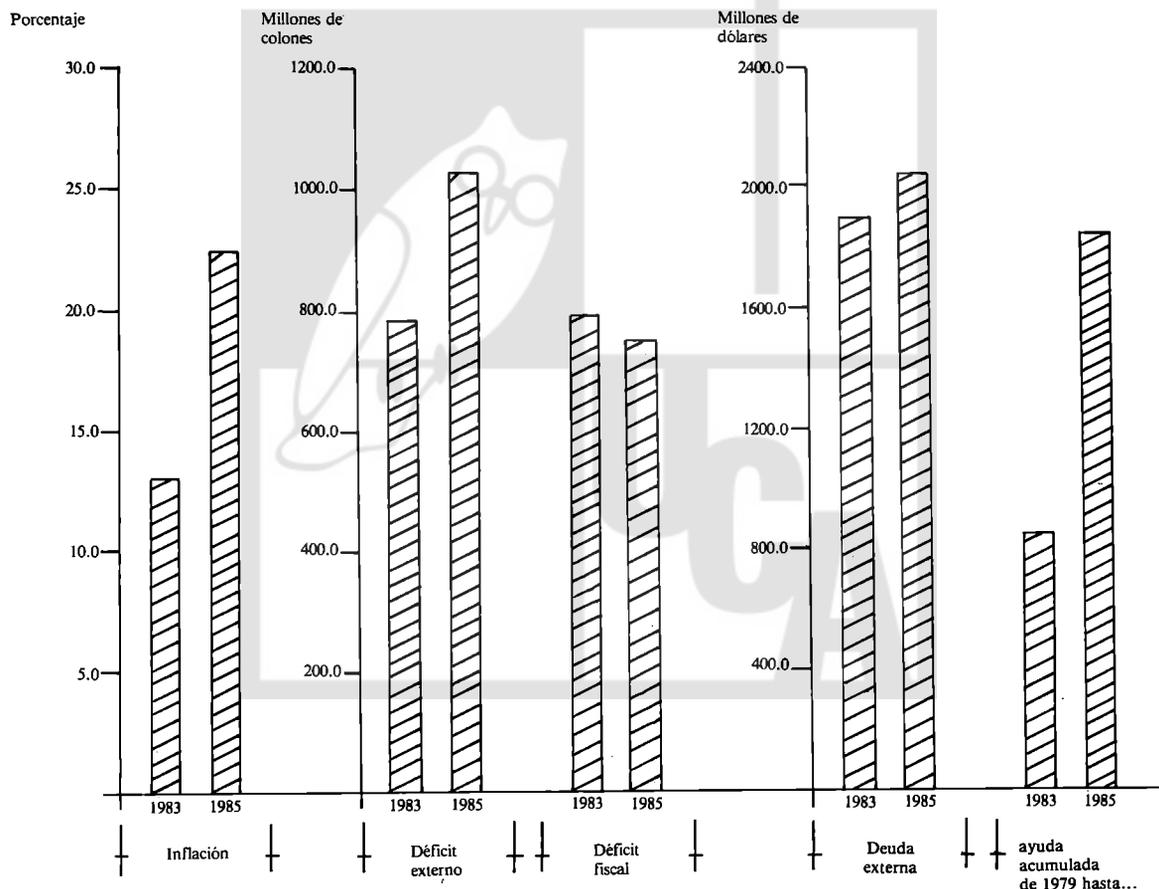
mucho más de la ayuda económica y militar de Estados Unidos.

Por otro lado, mientras en 1983 la actividad reivindicativa laboral fue inexistente, en 1985 se desarrolló un considerable movimiento laboral. En efecto, en este año se dieron, según *Proceso*, 65 paros laborales, se involucraron 46 organizaciones gremiales y sindicales, se movilizaron cerca de 60.000 trabajadores y los días no trabajados por causa de los paros ascendieron a 306 en el sector público y a 293 en el privado.

En este contexto de profundización de la crisis económica, de inflación, de insostenibilidad del sector externo y de polarización creciente

GRAFICO 6

Comparación económica 1983 - 1985



Fuente: Banco Central de Reserva. La información sobre la ayuda acumulada desde 1979 proviene de AID, citada en *NACLA. Report on the Americas, 1986, I.*

entre el gobierno y los sectores empresarial y laboral, el Ejecutivo presionado adicionalmente por AID, hechó a andar, en enero de 1986, el "Programa de estabilización y reactivación económica."

Los objetivos enunciados del programa fueron los siguientes. En el campo fiscal, reducir el déficit y su financiamiento por el Banco Central de Reserva; en el monetario, disminuir la expansión de la moneda, sin afectar la expansión del crédito al sector empresarial; en el cambiario, estabilizar la moneda en su nivel "realista" de 5.00 colones por dólar, combatiendo de esta manera el déficit del sector externo; en precios y salarios, establecer una adecuada protección de la canasta básica y un aumento de 150.00 colones a los empleados públicos; y en la producción, la reactivación económica.

El programa recibió de inmediato el rechazo de todos los sectores. En los meses posteriores al inicio del programa se movilizaron el sector laboral y el sector empresarial.

El sector laboral experimentó algunos cambios cualitativos en su organización. El 5 de febrero, en respuesta al programa de estabilización decretado por el gobierno, se anunció la formación de la Unidad Nacional de los Trabajadores Salvadoreños (UNTS), constituida inicialmente por sectores laborales de diversas ideologías, muchos de los cuales, en los años anteriores, formaron la base social de apoyo del gobierno democristiano; entre ellos, la UPD. Pero también se agruparon, en lo que puede considerarse la mayor organización de los sectores laborales existente hasta el momento, algunos grupos sindicales como el Comité Primero de Mayo y ANDES 21 de Junio, tradicionalmente opositores al régimen.

Inmediatamente después de su formación, la UNTS organizó la asamblea y la "Marcha nacional por la supervivencia de los trabajadores" para protestar por la política económica del gobierno, la cual consideraron como una política para financiar la guerra a través "de castigar aún más, la pobre economía de los trabajadores salvadoreños." La UNTS¹⁷ estructuró su propuesta en torno a dos aspectos: el rechazo de la política económica del gobierno, que en vez de mejorar las condiciones de vida de los trabajadores la había empeorado, y el rechazo del conflicto socio político que ha llevado al gobierno de la república a perder la autonomía y la soberanía na-

cional, en manos del gobierno de Estados Unidos. En consecuencia, la política económica del gobierno debería orientarse a recuperar la capacidad adquisitiva de los salarios, a la creación de nuevos puestos de trabajo, a la ejecución de la segunda etapa de la reforma agraria y a la absorción de la deuda agraria. Además, la UNTS exigió hacer efectiva la política de pacificación, llevando adelante el diálogo con el FDR-FMLN e iniciar el proceso de recuperación de la soberanía nacional.

Por otra parte, el sector privado movilizó rápidamente a sus gremiales para rechazar unificadamente el programa de estabilización y en general la política económica del actual gobierno. Para ello, el 13 de marzo, convocó al foro de la "Unidad empresarial para la defensa de libertad económica y la reactivación nacional," en el cual se concluyó que era necesario "exigirle al gobierno que ya es tiempo que defina una política económica basada en los principios de la libre empresa, para iniciar un verdadero proceso de reactivación, dentro del respeto absoluto del marco de nuestra constitución."¹⁸

De este foro surgió la Unidad Productiva Salvadoreña formada por ANEP, ASI, CCIES, y SCIS, cuya función sería defender el sistema de la libre empresa y contrarrestar la política injerencista del gobierno en la actividad económica. Entre otras cosas, el foro rechazó la política del gobierno de implantar controles de precios o de fijar márgenes de ganancias y exigió la eliminación de la comercialización estatal de cualquier producto. Este último punto coincidió con el aceleramiento de las exigencias de los cafetaleros de declarar inconstitucional al INCAFE.

A estas reacciones del sector laboral y empresarial, el gobierno respondió de manera diferenciada. Frente a la UNTS constituyó una organización pro-gubernamental alternativa, la Unión Nacional Obrero-Campesina, (UNOC), cuya movilización inicial en apoyo al "proceso democratizador del gobierno" se debilitó progresivamente. Al sector empresarial el presidente le pidió apoyar su programa económico a fin de "ayudarle a producir los frutos que está llamado a generar."¹⁹

En síntesis, la gestión económica del presidente Duarte en 1986 se enfrenta a un mayor deterioro económico y a una menor disposición del sector laboral y del empresarial a aceptar pasivamente su política económica, lo cual significa, en

otras palabras, mayores dificultades para llevar adelante la reactivación económica del país.

En esta dirección apuntan los primeros resultados del programa de estabilización obtenidos hasta marzo de 1986. En un informe de indicadores económicos del Banco Central de Reserva se afirma que de 12 sectores industriales, 7 de ellos habían contraído su nivel de actividad en febrero de este año con respecto al mismo mes del año anterior. En otro informe de la misma institución se han presentado las dificultades para lograr los objetivos del programa de estabilización.²⁰ Contrario a lo esperado, la oferta monetaria continuó su tendencia expansiva; el déficit fiscal continuó forzando el financiamiento por emisión monetaria a pesar de los límites definidos por el programa; y la inflación, a pesar de que el Banco Central ha informado hasta marzo un moderado 7.5 por ciento, se ha hecho sentir en mayor medida que en los años anteriores. Contrario a este resultado presentado por el Banco Central de Reserva, la dirección de comercio interno del ministerio de economía ha presentado una serie de incrementos de precios en bienes de la canasta básica que representan un promedio no ponderado el 43.2 por ciento de enero a junio.

A finales del segundo año de gobierno del presidente Duarte las cosas están más difíciles que al principio del primer año de su mandato. La economía se haya más deteriorada y aunque el Producto Interno Bruto creció levemente en 1984 y 1985, lo hizo sobre las cuerdas flojas del déficit externo, de la inflación, de la ayuda internacional y de la deuda externa. Nuevos intentos para mantener el nivel de actividad económica corren el riesgo de aflojar aún más las cuerdas que la sostienen.

Consideraciones finales

A lo largo de los primeros 2 años de gobierno democristiano la política económica se ha ido subordinando cada vez más a la dinámica de la guerra. La nueva estrategia contrainsurgente de extensión de la guerra a los campos económico, político, militar, sociológico y psicológico, ha convertido la política económica en uno de sus instrumentos principales. De ahí la progresiva pérdida de autonomía en las decisiones de



política económica experimentada en los últimos 2 años en favor de las instituciones internacionales, elementos claves tradicionales de la política exterior norteamericana.

En consecuencia, los principales criterios que han regido la formulación de la política económica reciente se ordenan en torno a la guerra. En primer lugar, el financiamiento directo de la guerra; en segundo lugar, el gasto público para alejar a las masas del FMLN-FDR, conforme a la estrategia de reconstrucción de la nación, en cuanto componente no militar de la guerra; en tercer lugar, el endeudamiento y la ayuda internacional para sostener al sector externo de la economía, resquebrajado cada año en mayor medida, a fin de mantener el aparato productivo funcionando mínimamente y llevar adelante la

Los sectores populares con sus luchas han forzado los aumentos salariales contrariando la voluntad del ejecutivo.

guerra; y en cuarto lugar, la promoción del sector privado para reactivar la economía según los términos de la estrategia contrainsurgente.

La subordinación de la política económica a las exigencias del proyecto norteamericano de contrainsurgencia ha agudizado la crisis económica. Puede afirmarse que, aunque durante estos 2 últimos años la actividad económica experimentó un leve crecimiento, la economía salvadoreña ha empeorado considerablemente. El déficit externo se amplió a un nivel autónomamente insostenible, la inflación aceleró su ritmo, la deuda externa se expandió y la ayuda económica norteamericana se constituyó en el principal soporte de la actividad económica.

En vez de optar por enfrentar las causas originarias estructurales de la crisis y de abandonar una estrategia diseñada en función de la seguridad nacional norteamericana y no de las necesidades e intereses del pueblo salvadoreño, buscando seriamente para ello una solución política realista al conflicto, el gobierno optó por implementar una política de estabilización, la cual únicamente pretende aliviar los grandes desequilibrios acumulados hasta el presente, con el fin de poder continuar con la estrategia contrainsurgente, a costa de sacrificar aún más las condiciones de vida de los sectores populares.

El proyecto norteamericano seguirá imponiéndose al gobierno y a la Fuerza Armada en los próximos años. Esto significa que la guerra continuará siendo el eje central en torno al cual oscilará la gestión del presidente Duarte. Sin embargo, después de 2 años de llevar adelante un proyecto que no responde a los intereses del pueblo salvadoreño, permanentemente manifestado por los distintos sectores sociales, ha desgastado no-

tablemente la imagen interna del presidente y, en consecuencia, su capacidad para lograr los objetivos que se había fijado. Acaso sea esta la razón de la necesidad urgente de iniciar su tercer año convocando a una tercera ronda de negociaciones con el FMLN-FDR.

NOTAS

1. Departamento de Economía, "Dinámica y crisis de la economía salvadoreña." *Estudios Centroamericanos*, 1986, 447-448.
2. "Duarte: Prisoner of war." NACLA. Report on the Americas, 1986, 1.
3. Sara, Miles, "The Real War. Low-Intensity Conflict in Central América." NACLA. Report on the Americas, 1986, 2.
4. *Ibid.*
5. "Duarte: Prisoner of War."
6. "Cambios estratégicos de contrainsurgencia." *Proceso*, 1986, 248-249, pp. 7; y "Unidos para reconstruir: se profundizan los esfuerzos de contrainsurgencia," *Proceso*, 1986, 250, pp. 8.
7. Conferencia del ministro de defensa en 1984, citada en "Duarte: Prisoner of War," pp. 22.
8. "Duarte: Prisoner of War."
9. *Proceso*, 1985, 146, pp. 10.
10. José Antonio Alvarado. "Algunos elementos de análisis de la política fiscal," *Boletín de Ciencias Económicas y Sociales*, 1986, 1.
11. "Duarte: Prisoner of War," pp. 24.
12. "Unidos para reconstruir." *Op. cit.*, pp. 9.
13. *Proceso*, 1986, 206, pp. 4.
14. *Proceso*, 1985, 146, pg. 10.
15. Banco Central de Reserva. *Memorias de 1984*, pp. 63.
16. "Balance de la economía salvadoreña 1985." *El Salvador Coyuntura Económica*. 4 y 5, pp. 5.
17. "Planteamiento de la UNTS," *Proceso*, 1986, 226, pp. 15-6.
18. "Solidaridad empresarial," *Proceso*, 1986, 229, pp. 6.
19. *Ibid.*, pp. 8.
20. Banco Central de Reserva. "Memorándum No. 58/56," reproducido en *Estudios Centroamericanos*, 1986, 450.